

# El pulso de Montero a Madrid aflora 3.300 grandes patrimonios

► La batalla de Hacienda y CC.AA. del PP frena la cifra de declarantes en el resto de España

BRUNO PÉREZ  
MADRID

Las guerras siempre tienen consecuencias. A finales de 2022 el Ministerio de Hacienda decidió cargar con todo contra lo que consideraba como el 'oasis fiscal' de la Comunidad de Madrid e ideó una nueva figura estatal, el controvertido gravamen sobre las grandes fortunas, para obligar a tributar de forma efectiva a los grandes patrimonios de más de tres millones de euros residentes en la región, beneficiados desde hacía años por una bonificación autonómica que les eximía de pagar el 100% de la cuota del Impuesto de Patrimonio.

La maniobra proporcionó a las arcas del Estado, según los datos difundidos por el propio Ministerio, 623 millones de euros de algo más de 12.000 declarantes, de los que 555 millones de 10.300 declarantes se obtuvieron de la Comunidad de Madrid.

¿Objetivo cumplido? Los datos de declarantes del Impuesto de Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2022 ofrecen una foto diversa. Revelan, por ejemplo, que el número de personas que presentaron el impuesto en la Comunidad de Madrid se incrementó en una cuantía inusual de más de 3.300 en 2022, elevando de

## EL LÍO EN PATRIMONIO

### Inseguridad jurídica

**El pulso entre el Gobierno y las CC.AA. del PP ha creado un clima de inestabilidad jurídica, que según los datos ha afectado tanto al número de declarantes como al patrimonio declarado al Fisco.**

### El caso de Madrid

**La obligación de pagar el gravamen estatal ha emergido 3.300 nuevos declarantes en la Comunidad de Madrid, que han aflorado un patrimonio de 36.000 millones. Ha sido la excepción**

### El caso andaluz

**La reforma andaluza ha eximido de declarar a más de 7.000 contribuyentes, lo que explica la caída de declarantes, pero no el desplome del patrimonio declarado.**

paso el patrimonio declarado en la región en más de 36.000 millones de euros, un salto sin precedentes.

Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (Reaf), atribuye el movimiento a la entrada en vigor del gravamen estatal sobre las grandes fortunas, que podría haber empujado a presentar la declaración de Patrimonio a contribuyentes que no lo hacían por no tener la obligación de pagarlo.

Siro Barro, socio de Fiscal del despacho Escalona & De Fuentes, especializado en gestión de grandes patrimonios, se suma a esta teoría. «Es probable que hasta 2022 la no obligación de pagar el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid y la multa administrativa de 200 euros por incumplir la obligación formal de presentar la declaración haya hecho que algunos contribuyentes hayan preferido asumir el riesgo de esa multa a declarar su patrimonio», dice, perfilando un fenómeno sobre el que hace tiempo que se sospechaba en las oficinas centrales de la Agencia Tributaria aunque en magnitudes muy superiores a las que ha puesto de manifiesto la estadística oficial.

El incremento de declarantes en la Comunidad de Madrid ha sido, sin embargo, la excepción. La estadística publicada por la Agencia Tributaria muestra un parón tanto del número de declarantes como del patrimonio declarado en el impuesto tras la entrada en vigor del gravamen estatal. Se explica en gran medida por lo sucedido en Andalucía, donde la supresión de la obligación de pagar el Impuesto de Patrimonio vino acompañada de la eliminación de la obligación de declarar para los contribuyentes con patrimonios inferiores a los dos millones de euros lo que redujo de un plumazo en 7.300 el número de contribuyentes andaluces.

El encadenamiento de cambios regulatorios, acaecidos en un contexto de pulso político abierto entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el PP que ha generado un clima de inseguridad jurídica en torno al marco del Impuesto de Patrimonio en España, se ha traducido en un parón sin precedentes en la cifra de declarantes del impuesto, que experimentó en 2022 su primer retroceso en años y en el volumen del patrimonio declarado, que sin el efecto de Madrid se habría desplomado en 15.000 millones de euros.